

M<sup>a</sup> Luz Rodríguez Fernández, Profesora Titular EU de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, y miembro del Cuerpo de Árbitros para Ciudad Real del Jurado Arbitral de Castilla-La Mancha, habiendo sido designada de común acuerdo por las partes para la resolución del Procedimiento de Arbitraje con número de expediente JA-P/AR-CR-01/03, procedo a dictar el siguiente **LAUDO ARBITRAL**:

### **ANTECEDENTES**

1. Con fecha de 20 de noviembre de 2002, la Comisión Paritaria del V Convenio del Personal del Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real (en adelante, SCIS) acuerda solicitar la iniciación de procedimiento de mediación ante el Jurado Arbitral de Castilla-La Mancha, sede de Ciudad Real, a fin de solventar el conflicto habido entre sus miembros en relación con la interpretación que deba hacerse de la Disposición Transitoria 5<sup>a</sup> de dicho Convenio, que reza del siguiente modo: "Si durante la Vigencia del Convenio la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha regulase mediante alguna norma a las Policías Locales de la Región e incluyese a los Agentes de la Policía Local en el Grupo C de la Administración Pública o su equivalente Grupo III del Personal Laboral, se reunirá la Comisión Paritaria en sesión extraordinaria con el único objeto de adecuar el contenido del Convenio para incluir en el Grupo C del mismo, las categorías de Jefe de Unidad de Intervención, Jefe de Unidad de Centro Coordinador, Bombero y Operador del Centro Coordinador. Las modificaciones pasarán a formar parte del Convenio Colectivo".

2. Con fecha de 26 de noviembre de 2002 tiene entrada en el registro del Jurado Arbitral de Castilla-La Mancha, sede de Ciudad Real, solicitud de mediación de mutuo acuerdo, suscrita por D. Ángel Amador Muñoz, en su calidad de Presidente del SCIS, D. José María Roldán Real, en su calidad de



Presidente del Comité de Empresa del SCIS, y D. José Manuel Márquez Villarejo, en su calidad de representante del Sindicato UGT en la Comisión Paritaria del V Convenio Colectivo del SCIS. En dicha solicitud se señala que el objeto de las discrepancias habidas entre las partes es la interpretación de la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo del SCIS y que el objeto de la mediación solicitada es lograr un acuerdo al respecto de la misma.

3. Con fecha de 2 de diciembre de 2002 tiene lugar la primera sesión del procedimiento de mediación referido y que tiene por número de expediente JA-P/CC-CR-26/02. En ella, tras producirse el debate entre las partes que está reseñado en el Acta de esta sesión, se hacen las siguientes propuestas: a) por parte de la representación del SCIS se propone proceder a la re-clasificación que establece la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo, pasando del Grupo D al C las categorías que en ella se hacen referencia, en el mes de diciembre de 2003, comprometiéndose, además, a adoptar las medidas necesarias que permitan a los trabajadores que no tengan la titulación exigida para el Grupo C adquirir dicha titulación antes de dicha fecha; b) por parte de la representación de CC.OO se propone, sin embargo, que la re-clasificación de las categorías mencionadas en la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo se realice en enero de 2003 y que entre sus efectos incluya tanto el salario del Grupo como el salario correspondiente al Nivel; c) a esta última propuesta se adhieren los representantes de UGT y CSI-CSIF. No obstante estas propuestas, las partes no logran alcanzar un acuerdo entre ellas y, a iniciativa del órgano de mediación, se las convoca a una segunda sesión.

4. Con fecha de 4 de diciembre de 2002, tiene lugar la segunda sesión del procedimiento de mediación. En ella, el órgano de mediación realiza la propuesta siguiente: "La re-clasificación prevista en la Disposición Transitoria 5ª del Convenio Colectivo del SCIS se aplicará con fecha de 1 de octubre de 2003. Las partes acuerdan que de manera transitoria el personal adscrito al





Grupo C fruto de la re-clasificación mantendrá su Nivel actual hasta que en la negociación del próximo convenio se proceda a la adscripción definitiva". Esta propuesta es aceptada por la representación del SCIS, así como por el representante de CSI-CSIF. La representación de CC.OO la rechaza, pero advirtiéndole que aceptaría la misma si la fecha en que se procediera a la re-clasificación fuera julio de 2003. La representación de UGT rechaza sin más la propuesta. Ello hace que el procedimiento de mediación concluya finalmente sin acuerdo.

5. No obstante la falta de acuerdo habida en el procedimiento de mediación, el órgano de mediación ofrece finalmente a las partes la posibilidad de someter el conflicto a procedimiento de arbitraje. Este ofrecimiento es aceptado por la representación del SCIS, quien prefiere una solución negociada que el recurso a la jurisdicción social, pero cuenta con el rechazo de la representación de los trabajadores.


6. A pesar del inicial rechazo, con fecha de 13 de enero de 2003 tiene entrada en el registro del Jurado Arbitral de Castilla-La Mancha, sede de Ciudad Real, Convenio Arbitral por el que se solicita la tramitación de procedimiento de arbitraje. Este Convenio Arbitral está suscrito por D. Ángel Amador Muñoz, en su calidad de Presidente del SCIS, y D. José María Roldán Real, en su calidad de Presidente del Comité de Empresa del SCIS, y en él se me designa como Árbitro para la solución de la controversia habida entre las partes, sin fijar, no obstante, plazo para ello, no constando, además, de manera expresa cuál es el objeto del procedimiento de arbitraje.

7. Habiendo sido citadas las partes para comparencia en el procedimiento de arbitraje referido y que tiene por número de expediente JA-P/AR-CR-01/03, comparecen los representantes del SCIS, CC.OO, UGT y CSI-CSIF que se relacionan en el Acta de esta comparencia, procediéndose en la misma, en



primer término, a determinar el objeto del procedimiento de arbitraje. Éste queda fijado en la forma que sigue y que se hace constar en el propio Convenio Arbitral por acuerdo entre las partes: "1º) Determinar la fecha de entrada en vigor de la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo, tomando como punto de partida la propuesta formulada por el órgano de mediación en sesión de 4 de diciembre de 2002, salvo en lo relativo a las fechas, y dentro del arco de tiempo aceptado por las partes de 1 de enero de 2003 a 31 de diciembre de 2003. 2º) Considerar las condiciones de acceso al Grupo C de los trabajadores que no cuentan con la titulación requerida para ello". Tras fijar el objeto del procedimiento de arbitraje, se da por mi parte audiencia a las partes a fin de que todas ellas expongan los aspectos del conflicto que entiendan más relevantes. De esta audiencia y de las posiciones mantenidas por cada una de las partes queda constancia en el Acta de esta sesión.

### **FUNDAMENTOS**



1. De los antecedentes reseñados se deduce que son dos las cuestiones que las partes de este procedimiento de arbitraje someten a mi juicio. La primera de ellas es la relativa al momento en que debe entrar en vigor la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo del SCIS; la segunda, la consideración de las condiciones en que puedan acceder al Grupo C del Convenio Colectivo referido aquellos trabajadores que no cuentan con la titulación requerida para ello y que viene fijada en el propio Convenio.

2. Por lo que se refiere a la primera de las anteriores cuestiones, creo que un mejor entendimiento de la misma hace que deba detenerme mínimamente en el propio objeto de la controversia habida entre las partes. El conflicto que dio origen, en primer lugar, al procedimiento de mediación y, en segundo término, a este procedimiento de arbitraje ha sido la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo del SCIS o, para ser más exactos, el






**Jurado  
Arbitral**

**Castilla-La Mancha**

Ctra Fuensanta, s/n  
13071 CIUDAD REAL  
Tfno. 926/223450  
Fax. 926/253080

momento en que debe procederse a la aplicación de la regulación contenida en esta Disposición Transitoria 5ª. Y ello por motivo de una diferente interpretación de cuál haya de ser ese momento.

Así, para la representación de los trabajadores, el momento en que debe aplicarse dicha Disposición es la aparición de la Ley 8/2002, de 23 de mayo de 2002, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Ello en razón de que la Disposición Transitoria 5ª hace depender la adecuación del contenido del Convenio en lo relativo a la inclusión en el Grupo C del mismo de las categorías de Jefe de Unidad de Intervención, Jefe de Unidad del Centro Coordinador, Bombero y Operador del Centro Coordinador del hecho de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha regule las Policías Locales de la Región e incluya a los Agentes de Policía en el Grupo C de la Administración. De este modo, una vez producida esta regulación, una vez dictada la Ley 8/2002, debe procederse, siempre según la representación de los trabajadores, a la aplicación inmediata de la Disposición Transitoria 5ª del Convenio Colectivo y a la re-clasificación profesional contenida en la misma, ya que ésta era la condición que se establecía en la propia Disposición Transitoria.



Sin embargo, la representación del SCIS ha venido sosteniendo una interpretación diferente. Para esta parte, la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª del Convenio Colectivo no tiene en modo alguno carácter inmediato, sino que debe estarse a los propios términos de la Ley 8/2002. Entiende la representación del SCIS que, una vez aparecida la Ley 8/2002, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, se ha producido, en efecto, el hecho a que se condicionaba la re-clasificación de los trabajadores del SCIS (de aquéllos cuya categoría profesional sea alguna de las referidas en la Disposición Transitoria 5ª del Convenio Colectivo), pero que ello no implica que dicha re-clasificación profesional deba hacerse en el mismo momento de la aparición de la Ley, sino en el propio tiempo que dispone la misma para



desarrollar los procesos de re-clasificación profesional a que ella se refiere y que, de conformidad con su Disposición Transitoria Segunda, es de dos años a contar desde su entrada en vigor. De esta forma, la adaptación a que se refiere la Disposición Transitoria 5ª del Convenio Colectivo debería operarse, no de un modo inmediato, sino en los dos años siguientes a la aparición de la Ley 8/2002, lo que situaría la fecha de dicha re-clasificación a mediados del año 2004.

En consecuencia con lo anterior, parece claro que el conflicto entre las partes de este procedimiento de arbitraje radica en el momento en que deba aplicarse la re-clasificación contenida en la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo del SCIS; momento que en un principio fue, para la representación de los trabajadores, mediados de 2002 y, para la representación del SCIS, mediados del 2004 y que, como luego diré, en la actualidad, tras un acuerdo habido entre las partes al respecto de este tema, se sitúa en el 1 de enero de 2003 para la representación de los trabajadores y en el 31 de diciembre de 2003 para la representación del SCIS.

2. El hecho de que el conflicto habido entre las partes de este procedimiento arbitral haya quedado fijado en los términos que se acaban de reseñar es trascendente por los motivos que siguen. En primer lugar, porque ello determina los trabajadores afectados por el conflicto, que son únicamente los referidos por la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo del SCIS. En efecto, siendo el objeto del conflicto y de este procedimiento arbitral el momento en que deba aplicarse la Disposición Transitoria 5ª de este Convenio, parece de todo punto evidente que los trabajadores afectados por el conflicto son únicamente aquéllos a que se refiere esta Disposición, y que, a tenor de la misma, son los que tienen las categorías de Jefe de Unidad de Intervención, Jefe de Unidad del Centro Coordinador, Bombero y Operador del Centro Coordinador.





**Jurado  
Arbitral**

**Castilla-La Mancha**

**Ctra Fuensanta, s/n  
13071 CIUDAD REAL  
Tfno. 926/223450  
Fax. 926/253080**

Se aclara este aspecto porque por parte de la representación de UGT, tanto en el procedimiento de mediación, como en el propio procedimiento de arbitraje, se ha hecho mención de que los trabajadores que deberían estar afectados por la re-clasificación que se pudiera producir habrían de ser todos los del SCIS. Sin entrar, por supuesto, a valorar esta pretensión, lo cierto es que la misma no puede ser objeto de consideración por mi parte en este procedimiento arbitral. Y no puede serlo porque, como ha quedado dicho, el objeto del conflicto y de este procedimiento de arbitraje es únicamente la determinación del momento de aplicación de la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo del SCIS. En esta Disposición, única, se insiste, a la que se refiere el conflicto y este procedimiento arbitral, únicamente se hace referencia a determinadas categorías de trabajadores (Jefe de Unidad de Intervención, Jefe de Unidad del Centro Coordinador, Bombero y Operador del Centro Coordinador) y no a todos los trabajadores del SCIS. De ahí que mi resolución únicamente debe referirse a estas categorías de trabajadores expresadas en la Disposición Transitoria 5ª, pues al enjuiciamiento de cuándo debe ser aplicada la misma se circunscribe el objeto de este procedimiento arbitral. Por ello mismo, de pronunciarme al respecto de la re-clasificación de otros trabajadores, los pertenecientes a categorías profesionales no referidas en forma expresa en la Disposición Transitoria 5ª objeto de conflicto, estaría claramente rebasando los márgenes en que debe contenerse mi actuación. Limitada, se insiste una vez más, a enjuiciar de conformidad con mi criterio cuándo debe ser de aplicación la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo del SCIS, y cuándo debe serlo, por tanto, en los estrictos términos que en ella están contenidos y que se refieren únicamente a las categorías de Jefe de Unidad de Intervención, Jefe de Unidad del Centro Coordinador, Bombero y Operador del Centro Coordinador.



3. En segundo lugar, la delimitación del objeto del conflicto y de este procedimiento arbitral en los términos más arriba expuestos tiene trascendencia en la función, si es que así puede decirse, que debe atribuirse a la Ley 8/2002, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. El hecho de que la controversia surgida entre las partes se refiera al momento en que debe comenzar a aplicarse la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo del SCIS hace que la referida Ley no tenga más función que la de servir de pauta temporal, ciertamente controvertida, para la aplicación de esta Disposición. Estando el conflicto limitado a la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo del SCIS, es, en efecto, patente que los trabajadores afectados por el mismo no son más que los referidos en esta Disposición, siendo la Ley de Coordinación de las Policías Locales un mero elemento para medir el comienzo en la aplicación de la misma, pero sin que pueda alterar en modo alguno el ámbito de los trabajadores que se vean afectados por la re-clasificación profesional objeto de controversia.

Dicho de otra forma: la Ley 8/2002 es el punto de referencia para ver cuándo se opera la re-clasificación de los trabajadores del SCIS, sin que ello afecte en modo alguno a la regulación contenida en la misma acerca de los Policías Locales. No se está debatiendo en este procedimiento arbitral cuándo deben operarse los procedimientos de re-clasificación profesional que se contienen en la Ley 8/2002 y que aquí, obviamente, no vienen al caso, sino cuándo deben operarse los procesos de re-clasificación profesional a que se refiere la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo del SCIS, que se refiere a la aparición de la Ley de Policías Locales como momento en el que estos últimos procedimientos de re-clasificación profesional habrán de producirse. Por tanto, no se está haciendo aquí, ni puede hacerse por no ser objeto de este procedimiento arbitral, una interpretación de cuándo han de realizarse los procesos de re-clasificación profesional previstos en la Ley 8/2002, sino únicamente de cuándo habrán de operarse los procesos de re-



clasificación profesional previstos en el Convenio Colectivo del SCIS y, por tanto, referidos únicamente a los trabajadores afectados por dicho Convenio, en particular, y según dispone la Disposición Transitoria 5ª del mismo, a aquéllos pertenecientes a las categorías de Jefe de Unidad de Intervención, Jefe de Unidad del Centro Coordinador, Bombero y Operador del Centro Coordinador.

4. Pues bien, delimitado en la forma que antecede el objeto de la controversia, parece el momento de decidir su solución. Antes de ello, debo, no obstante, aclarar que el mandato dado a esta Ábitro en el Convenio Arbitral con que se ha iniciado este procedimiento de arbitraje no es ilimitado, en el sentido de poder fijar por mi parte con entera libertad el momento a partir del cual yo entiendo que debe comenzar a aplicarse la tantas veces referida Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo del SCIS. Y no lo es porque el objeto de este procedimiento es la determinación de ese momento, pero dentro de los límites que se fijan en el propio Convenio Arbitral. Límites que son, de una parte, los términos de la propuesta formulada en fecha de 4 de diciembre de 2002 por el órgano de mediación en el transcurso del procedimiento de mediación emprendido inicialmente por las partes y, de otro, el arco de tiempo que va desde el 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre del 2003, fruto este último de un acuerdo habido entre las partes en momentos previos a la solicitud del propio procedimiento de arbitraje (tal como se manifiesta por ellas, además, en el acto de la comparecencia habida el 17 de enero de 2003, donde todas las partes de este procedimiento arbitral ratifican estar de acuerdo con que la decisión del Ábitro se haga dentro de este arco de tiempo).

Por lo que se refiere, en primer término, a la propuesta del órgano de mediación, que ha sido aceptada como marco de este procedimiento arbitral, salvo en lo relativo a las fechas, que deberá fijar esta Ábitro, los términos de la misma son como siguen: "La re-clasificación prevista en la Disposición

Transitoria 5ª del Convenio Colectivo del SCIS se aplicará con fecha de 1 de octubre de 2003. Las partes acuerdan que de manera transitoria el personal adscrito al Grupo C fruto de la re-clasificación mantendrá su Nivel actual hasta que en la negociación del próximo convenio se proceda a la adscripción definitiva". Así, salvo en lo relativo a la fecha en que debe producirse la re-clasificación prevista en la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo, que fue el aspecto excepcionado en forma expresa por las partes en el Convenio Arbitral y sobre el que yo debo resolver, parece que deba dejarse presente, como marco de este procedimiento de arbitraje, el resto de la propuesta de mediación formulada por el órgano de mediación en sesión de 4 de diciembre de 2002 y que, tal como acaba de transcribirse, supone que las partes de este procedimiento acuerdan que de manera transitoria el personal adscrito al Grupo C fruto de la re-clasificación profesional que pueda producirse como consecuencia de la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo del SCIS mantenga su Nivel actual hasta que en la negociación del próximo convenio se proceda a su adscripción definitiva.

5. En lo relativo, en segundo lugar, al arco de tiempo que limita mi decisión acerca del momento de la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª, el mismo ha quedado fijado por acuerdo entre las partes entre las fechas del 1 de enero de 2003 y del 31 de diciembre del 2003. Pues bien, dentro de este arco de tiempo, un sentido simple de equidad hace que la fecha que, a mi entender, deba fijarse como momento de la aplicación de dicha Disposición sea la del 1 de julio de 2003. La razón de esta decisión no es otra que la de situar el momento controvertido en el término justamente intermedio de la posición mantenida por ambas partes, de manera que la fecha en que comience la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo del SCIS sea equidistante de la mantenida por cada una de ellas.





Una vez que las partes han descartado sus posiciones iniciales al respecto del momento de aplicación de la Disposición Transitoria 5ª del Convenio Colectivo, se ha fijado por ellas mismas un arco de tiempo puramente aleatorio, en el sentido de no responder ni su comienzo ni su final más que a un acuerdo entre ellas de que esas habrán de ser las fechas inicial y final dentro de las cuales se habrá de mover la decisión de este Árbitro. Pues bien, siendo, como se dice, puramente aleatorio el arco de tiempo fijado por las partes para delimitar los momento inicial y final que debo tener en consideración, no parece que haya razones para descartar que entre las fechas inicial y final que se me proponen yo elija justamente la intermedia, cifrando el comienzo de la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio del SCIS en la fecha de 1 de julio de 2003. Y es que, siendo las fechas inicial y final propuestas por las partes puramente aleatorias, parece, en efecto, que un mínimo sentido de la equidad lleva a considerar que la solución del conflicto más equilibrada es la determinación de una fecha de comienzo de la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio del SCIS que sea equidistante de la fecha mantenida por cada una de las partes. De este modo, la solución del conflicto, ni se acerca más a la posición mantenida por la representación de los trabajadores (que la fecha sea la del 1 de enero de 2003), ni se acerca más tampoco a la posición mantenida por la representación del SCIS (que la fecha sea la del 31 de diciembre de 2003); está, justamente, a medio camino entre ambas.

6. La segunda de las cuestiones sometidas a este procedimiento de arbitraje es la consideración de las condiciones de acceso al Grupo C de aquellos trabajadores que no tengan la titulación requerida para ello. Es claro, para empezar, que, como consecuencia de la re-clasificación que se habrá de producir en aplicación de la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo del SCIS, habrá trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales expresadas en esta Disposición que hayan de acceder al Grupo C y que, sin



**Jurado  
Arbitral**

**Castilla-La Mancha**

Ctra Fuensanta, s/n  
13071 CIUDAD REAL  
Tfno. 926/223450  
Fax. 926/253080

embargo, por provenir del Grupo D, no cuenten con la titulación requerida para su inclusión en el Grupo C. Titulación ésta que está referida en el art. 29 del propio Convenio Colectivo del SCIS y que es la correspondiente al título de bachiller, formación profesional de segundo grado o equivalente.

Pues bien, la cuestión que se somete a mi consideración es en qué condiciones debe producirse el acceso de estos trabajadores al Grupo C, teniendo en cuenta que la inclusión en el mismo exige una titulación que no tienen algunos de los trabajadores afectados por la re-clasificación profesional que debe llevarse a cabo por imperativo de la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio del SCIS. A fin de dar respuesta a esta cuestión, creo que debe partirse del dato de que esta Disposición no hace diferenciación alguna en relación con los trabajadores de las categorías profesionales a que se refiere. Esto es, no señala que los trabajadores que pasarán a incluirse en el Grupo C serán aquéllos que, dentro de las categorías profesionales expresadas por ella, cuenten con una determinada titulación. Al contrario, la Disposición Transitoria 5ª del Convenio del SCIS dispone que los trabajadores que pertenezcan a las categorías de Jefe de Unidad de Intervención, Jefe de Unidad del Centro Coordinador, Bombero y Operador del Centro Coordinador pasarán al Grupo C, sin distinguir ni hacer siquiera mención de cuál sea la titulación que deban tener estos trabajadores para que ese paso al Grupo C se produzca.

De lo anterior se deduce, y creo que de una forma clara, que la voluntad de las partes al pactar el contenido de la Disposición Transitoria 5ª era que todos los trabajadores perteneciente a las categorías profesionales reseñadas en la propia Disposición pasaran a formar parte del Grupo C, sin tener en consideración la titulación que pudieran tener estos trabajadores.

Pues bien, si tal era la voluntad de las partes, no parece que ahora deba desconocerse por esta Ábitro. Creo, en efecto, que la re-clasificación a que se





refiere la Disposición Transitoria 5ª del V Convenio Colectivo del SCIS debe venir referida a todos los trabajadores pertenecientes a las categorías de Jefe de Unidad de Intervención, Jefe de Unidad del Centro Coordinador, Bombero y Operador del Centro Coordinador, sin que para ello resulte un obstáculo el que algunos de estos trabajadores no tengan la titulación requerida para pertenecer al Grupo C. Y no lo es porque no estamos, jurídicamente hablando, ante un ascenso, donde deban respetarse las condiciones para ascender marcadas por el propio Convenio Colectivo, entre ellas, naturalmente, las que se refieren a la titulación que hayan de poseer los trabajadores. Se está, más bien, ante una adecuación de la propia estructura o clasificación profesional del Convenio Colectivo; adecuación que consiste en la inclusión de determinadas categorías de trabajadores en un Grupo diferente al inicialmente contemplado (Grupo D), pasando a formar parte del Grupo C.

Siendo, por tanto, una adecuación de la estructura o clasificación profesional del V Convenio Colectivo del SCIS, no debe la misma estar condicionada por más requisitos que los señalados en la propia Disposición Transitoria 5ª, y que no hacen referencia más que al momento en que se procederá a su realización (fijado por esta Arbitro en el 1 de julio de 2003). La determinación de la estructura o clasificación profesional de un convenio colectivo, se haga en el momento en que se negocia el mismo, o se haga en un momento posterior, como consecuencia de haber acordado las partes realizar dicha adecuación en caso de que en el futuro suceda algún acontecimiento que las mismas entienden relevante, no está sometida a ningún requisito que las partes deban respetar de antemano, sino que es una facultad enteramente libre para las partes de la negociación. Lo cual significa que la estructura o clasificación profesional que se establezca, en el momento inicial o en uno posterior, no tiene que estar sometida a más criterio que los que a las partes puedan convenir, sin que sea necesario, en concreto, que la pertenencia a un

determinado grupo profesional esté condicionada por la posesión de una determinada titulación.

7. Aplicando lo anterior al supuesto que nos ocupa, resulta, primero, que el significado de la Disposición Transitoria 5ª es el de diferir a un momento posterior la adaptación de la estructura o clasificación profesional del SCIS, haciendo coincidir el mismo con la regulación de las Policías Locales por parte de la Junta de Comunidades. Un vez producido este hecho, que es el que las propias partes habían fijado como el acontecimiento que daría paso a la adecuación de la estructura o clasificación profesional inicialmente recogida en el Convenio del SCIS, se debe realizar dicha adecuación, consistiendo la misma en que las categorías profesionales de Jefe de Unidad de Intervención, Jefe de Unidad del Centro Coordinador, Bombero y Operador del Centro Coordinador, que inicialmente estaban comprendidas en el Grupo D, van a pasar a estar comprendidas en el Grupo C. Y pueden estarlo, y estarlo sin ninguna condición (ni siquiera la atinente a la titulación que posean los trabajadores), porque tal ha sido el acuerdo habido entre las partes, que son, se insiste, enteramente libres para configurar la estructura o clasificación profesional del Convenio Colectivo. Así pues, lo único que sucede es que, una vez que entre en aplicación la Disposición Transitoria 5ª del Convenio Colectivos del SCIS, habrá una nueva estructura o clasificación profesional en el mismo, estructura o clasificación profesional donde, a diferencia de lo que ocurría inicialmente, las categorías de Jefe de Unidad de Intervención, Jefe de Unidad del Centro Coordinador, Bombero y Operador del Centro Coordinador formarán parte del Grupo C.

Ahora bien, no puede desconocerse que esta nueva estructura o clasificación profesional que tiene el SCIS a partir de la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª de su Convenio Colectivo entra de algún modo en contradicción con los preceptos que el propio Convenio dedica a la clasificación



profesional. En particular, no puede desconocerse que, mientras la nueva estructura o clasificación profesional, procedente de la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª, incluye en el Grupo C a trabajadores que no tienen el título de bachiller, formación profesional de segundo grado o equivalente (por provenir de un Grupo, el D, para el que no se requiere esta titulación), el art. 29 del Convenio exige que se tenga dicha titulación para estar incluido en el Grupo C. Contradicción ésta que viene motivada por la adecuación de la estructura o clasificación profesional que se tiene que operar como consecuencia de la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª y que tiene, lógicamente, que ser salvada de algún modo si no se quiere incurrir en una pura antinomia.

Posiblemente la mejor forma de salvar dicha contradicción sea la de proceder a la adecuación de todos aquellos aspectos del V Convenio Colectivo del SCIS que resulten afectados por la adecuación de la estructura o clasificación profesional que debe operar por mandato de la Disposición Transitoria 5ª del propio Convenio. Pero es ésta una opción o alternativa que únicamente corresponde a las partes de la negociación, soberanas como son para decidir los momentos y los contenidos de su actividad contractual. Entre tanto, quizá sirva para corregir la disfunción producida por la aplicación de la nueva estructura o clasificación profesional (que entra en contradicción con los requisitos de titulación exigidos por la anterior) la consideración de la capacitación con que cuenta el trabajador como condición para su acceso al Grupo C.

Es claro que a los trabajadores que van a ingresar en el Grupo C por efecto de la nueva estructura o clasificación profesional que va a tener el SCIS (consecuencia, se insiste, de la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª de su Convenio Colectivo) no se les puede exigir que posean una titulación que su anterior adscripción al Grupo D no exigía, pero ello no significa que no deban tener una determinada capacitación profesional. Ésta, la capacitación



**Jurado  
Arbitral**

**Castilla-La Mancha**

Ctra Fuensanta, s/n  
13071 CIUDAD REAL  
Tfno. 926/223450  
Fax. 926/253080

profesional, viene en buena medida dada por la propia formación que posea o adquiera el trabajador, con lo que bien puede ser esa formación la que, en tanto se proceda a reparar la contradicción que se acaba de poner de manifiesto, pueda servir como "título" que habilite para que el acceso de estos trabajadores al Grupo C se produzca sin incurrir en la misma.

En este sentido, es de dominio público que por parte del SCIS se procede a impartir unos cursos, denominados "Cursos de Formación para Agentes Operativos", que son los que capacitan a los trabajadores para el desarrollo de las funciones que después tendrán a su cargo. El hecho de que sea el propio SCIS el que imparte estos cursos, que su duración no sea en ningún caso inferior a trescientas horas, y que se consideren requisito imprescindible para poder acceder al correspondiente puesto de trabajo en el SCIS, avala, me parece, la conclusión de que, mediante ellos, los trabajadores obtienen un grado de formación que puede resultar de igual "rango" que la obtenida mediante la propia titulación académica. De ahí que, en tanto se procede a corregir las disfunciones que pueda producir la aplicación de la nueva estructura o clasificación profesional derivada de la Disposición Transitoria 5ª del Convenio del SCIS, puedan ser dichos "Cursos de Formación para Agentes Operativos" los que sirvan de "título" para el acceso al Grupo C de aquellos trabajadores que no tienen la titulación académica requerida para ello.

Consecuencia de todo lo anterior es, finalmente, el siguiente

#### **LAUDO ARBITRAL**

De una parte, la fecha en que el SCIS deberá proceder a la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª de su V Convenio Colectivo será la de 1 de julio de 2003, pasando en esa fecha las categorías de Jefe de Unidad de Intervención,





**Jurado  
Arbitral**

**Castilla-La Mancha**

**Ctra Fuensanta, s/n  
13071 CIUDAD REAL  
Tfno. 926/223450  
Fax. 926/253080**

Jefe de Unidad del Centro Coordinador, Bombero y Operador del Centro Coordinador a formar parte del Grupo C de dicho Convenio. De otra parte, todos los trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales que se acaban de referir pasarán a formar parte del Grupo C, incluso aquéllos que no cuenten con la titulación requerida para ello, ya que, en relación con éstos, será condición bastante para acceder al Grupo C haber seguido los "Cursos de Formación para Agentes Operativos".

Contra este Laudo cabe el recurso a que se refieren los arts. 11.8 del Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Castilla-La Mancha y 22.5 de su Reglamento de Aplicación, en los términos que figuran en los mismos.

En Ciudad-Real, a 23 de enero de 2003

Fdo.- Mª Luz Rodríguez Fernández, que actúa como Árbitro